

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 15 JUL 2020

Auto Interlocutorio Nro. 073

MAGISTRADO PONENTE: RONALD OTTO CEDEÑO BLUME

MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LABORAL
EXPEDIENTE	76001-23-33-000-2019-00705-00
DEMANDANTE	UNIDAD ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL - UGPP
DEMANDADO	JOSE HUMBERTO STORINO PÉREZ
ASUNTO:	NO REPONER

I. ASUNTO

Procede el despacho a resolver el recurso de reposición propuesto por la parte actora contra el auto interlocutorio nro. 469 del 10 de septiembre de 2019, por el cual se declaró la falta de jurisdicción de la demanda promovida por la UGPP contra el señor José Humberto Storino Pérez y remitir el expediente a los Juzgados Laborales del Circuito de Cali.

II. RECURSO

Mediante escrito visible a folios 98 a 101, el apoderado de la parte actora dentro del término oportuno interpuso recurso de reposición contra el auto interlocutorio nro. 469 del 10 de septiembre de 2019, para ello consideró que la UGPP acudió al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho por discutirse la legalidad la legalidad de las Resoluciones nro. 013460 del 24 de noviembre de 2004 y nro. 2838 del 11 de julio de 2005 proferidas por el ISS.

Indicó que, revisado el cuerpo normativo del código sustantivo del trabajo, no existe fundamento legal para que el presente caso sea de conocimiento de la jurisdicción laboral.

Sostuvo que mediante las pruebas documentales aportadas a la demanda, se logró demostrar que el señor José Humberto Storino Pérez, laboró en el ISS por más de 20 años, desempeñando el cargo de Odontólogo. Señaló que los empleados públicos realizan funciones de cargos administrativos y/o asistenciales como en el presente caso, y por tanto el asunto debe ser conocido por la jurisdicción contenciosa administrativa.

Precisó que es procedente iniciar acción de nulidad y restablecimiento del derecho en lesividad frente a los actos demandados por incompatibilidad pensional.

III. CONSIDERACIONES

El recurso de reposición interpuesto por el apoderado del demandante, es procedente toda vez que se interpuso dentro del término y porque contra el mismo no procede el recurso de apelación, conforme lo dispone el artículo 242 del CPACA.

El CPACA en su artículo 104, señala dispone que la jurisdicción de lo contencioso administrativo “*está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados*



en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa”, en el mismo artículo numeral 4º, establece que conocerá, entre otros procesos, de los “relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público”.

Por su parte del artículo 105 ibídem, precisa las excepciones a los asuntos que deben conocer esta jurisdicción, en su numeral 4º se establece que no conocerá de “los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales”.

El artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 2 de la Ley 712 y artículo 622 del CGP, precisa que la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de seguridad social, conocen de los conflictos jurídicos que se originan directa o indirectamente del contrato de trabajo y de aquellas que se susciten entre los afiliados y beneficiarios con las entidades administradoras y prestadoras de los servicios de seguridad social.

El Consejo de Estado, en providencia del 28 de marzo de 2019 ¹, estableció:

***“Es decir, por el solo hecho de que estos derechos y prestaciones se decidan negativa o positivamente a través de actos administrativos, no muta o cambia la jurisdicción competente para conocer de la controversia. De ahí que sea la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social la competente para decidir sobre estos conflictos, en cuyo caso el juez laboral, mediante sentencia reconoce o niega el derecho u ordena los pagos y compensaciones a que haya lugar, sin necesidad de anular el acto administrativo que negó o reconoció el derecho.
(...)”***

(v) Interpretación armónica de las competencias asignadas por el legislador.

De acuerdo con lo anterior, este despacho considera incorrecto aseverar que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de todos los casos en donde la entidad pública demanda la ilegalidad del derecho reconocido en un acto administrativo, porque pese a que el objeto del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es dilucidar la legalidad de los actos administrativos, ello no significa que la forma de la decisión pueda variar los criterios y reglas de competencia fijados por el legislador, tal y como se indicó en capítulos precedentes.

Muestra de ello es que esta jurisdicción no conoce de la legalidad de determinadas decisiones, pese a que tengan la forma de actos administrativos. V.gr. el acto administrativo que resuelve negativa o positivamente un derecho derivado de una relación laboral del trabajador oficial cuando este demanda la presunta irregularidad en su expedición. En este caso el demandante deberá acudir a la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social con el fin de que el juez estudie el derecho, defina la irregularidad de lo decidido por la entidad y le ordene a esta que adopte las decisiones y haga los reconocimientos que correspondan, sin declarar la nulidad del acto administrativo.

(...)” (Negrillas del Tribunal)

Se infiere de lo anterior que los conflictos derivados de la seguridad social de

¹ Consejo de Estado. Sección Segunda – Subsección A. Magistrado: William Hernández Gómez. Bogotá D.C., veintiocho (28) de marzo de dos mil diecinueve (2019). Radicación: 11001-03-25-000-2017-00910-00 (4857).

RADICACIÓN : 2019-00518-00
Medio de control : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Accionante : GERMAN ANTONIO GALLEG0 CASTRILLON
Accionado : NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL y CASUR



3

trabajadores oficiales como los del sector privado, deben ser dirimidos por la jurisdicción ordinaria laboral, aun cuando lo concerniente a la seguridad social de dichos trabajadores esté administrado por una persona de derecho público, puesto que el criterio que fija la competencia no es la existencia de un acto administrativo que define la situación prestacional, sino la naturaleza jurídica de la vinculación laboral.

El Decreto 3135 de 1968 en su artículo 5, señala que quienes presten sus servicios en una Empresa Industrial y Comercial del Estado tienen la categoría de trabajadores oficiales, salvo quienes se desempeñen en cargos de dirección y confianza, los cuales son empleados públicos.

Al revisar la Resolución 2838 del 11 de julio de 2005² objeto de demanda en este asunto, se observa que el trabajador oficial sobre el cual recayó el reconocimiento pensional, laboró como odontólogo general al servicio del extinto Instituto de Seguros Sociales, entidad cuya naturaleza era Empresa Industrial y Comercial del Estado³.

Así las cosas, las personas que prestan sus servicios en Empresas Industriales y Comerciales del Estado, como en el presente caso, por regla general, son trabajadores oficiales, lo cual determina que quien debe conocer del conflicto en discusión es la jurisdicción ordinaria.

De acuerdo con lo anterior las pretensiones formuladas por la UGPP para obtener el pago o reintegro de las sumas de dinero pagadas en exceso, deben resolverse por la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social, por lo tanto, no se repondrá la decisión tomada mediante auto nro. 469 del 10 de septiembre de 2019 y se ordenará actuar de conformidad con lo decidido.

En mérito de lo expuesto, el Despacho,

RESUELVE:

PRIMERO. NO REPONER PARA REVOCAR el auto nro. 469 del 10 de septiembre de 2019, por las razones expuestas anteriormente. En consecuencia, por Secretaría se dará cumplimiento a lo dispuesto en aquella providencia.

SEGUNDO.- Notificada la presente decisión, dese cumplimiento al auto nro. 469 del 10 de septiembre de 2019.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

RONALD OTTO CEDEÑO BLUME
Magistrado

² Ver folios 80 - 81

³ Decreto 2148 de 1992